

El Salvador proceso

informativo semanal

año 10
número 428

mayo 16
1990

ISSN 0259-9864

centro universitario de documentación e información

- No habrá paz sin justicia
- Sospechoso extravío de pruebas en el caso de la UCA
- El empantanamiento de la guerra
- Vicisitudes de la reforma agraria
- La primera crisis administrativa de Violeta de Chamorro

No habrá paz sin justicia

Hace ya seis meses que fueron masacrados por miembros del ejército los jesuitas de la UCA. También, a seis meses de su martirio, se ha reiniciado el proceso de negociación entre el gobierno y el FMLN. Ellos serían ahora, una vez más, los más imparciales y mejores orientadores para que en esta nueva oportunidad las conversaciones tuvieran el éxito que el pueblo salvadoreño espera de ellas. Por más de una razón, la marcha del proceso de investigación de su asesinato se halla estrechamente vinculada a la suerte del proceso de pacificación por el que tanto abogaron.

Después de los reveses que sufrieran los intentos del Juez Zamora para progresar en el esclarecimiento de la masacre, decir que el proceso se encuentra estancado, como ha concluido la Comisión Moakley en su primer informe (**Proceso 426**) es juzgarlo con excesiva benevolencia. No se trata de simples "especulaciones entorpecedoras", que es todo a lo que han llegado las lamentaciones del Presidente Cristiani, quien en un principio prometió al pueblo y al mundo encontrar y castigar hasta el último de los culpables. Son hechos y actitudes, frente al juez, que evidencian voluntad de desandar y deshacer lo poco que se ha avanzado.

Por un lado, los miembros de la Comisión de Honor nombrada por el Presidente han retrasado el proceso desoyendo los citatorios del juez. Y cuando se dignan presentarse, los designados para probar que la justicia entre los militares es también rigurosa, declaran con desfachatez que nada hicieron por esclarecer los hechos, pese a que fue en base al informe que elaboraron que el Presidente Cristiani se aventuró a divulgar el nombre de los asesinos materiales. Todavía más desconcertante es que, de acuerdo a uno de los fiscales específicos, el Presidente, quien tanto clama porque el que tenga pruebas sobre el caso las presente al juez, se guarda el informe escrito que le presentara la Comisión de Honor. Así, o la Comisión de Honor se mofa de las expectativas e indignación mundial que el caso ha despertado o el Presidente retiene información que debiera estar en posesión del juez.

Por otra parte, los cuatro cadetes citados por el juez a declarar, y para ello traídos con bombo del extranjero, manifiestan no ser ellos las personas requeridas por la justicia, al no haberse encontrado de guardia en la Escuela Militar la noche en que de allí partiera el comando asesino. En este nuevo intento del juez, de ser verdad lo afirmado por los cadetes, ¿quién dentro de la jerarquía militar le engañó proporcionándole nombres de oficiales que nada aportarían al proceso?

Adicionalmente, resulta que se ha "extraviado" el libro de control de entradas y salidas de la Escuela Militar, que serviría al juez para conocer la identidad de otros oficiales que convendría interrogar e

investigar. El Viceministro de Defensa, coronel Zepeda, ha afirmado que desconoce si existen tales tipos de control dentro de la Fuerza Armada, o al menos dentro de la Escuela Militar. En todo caso, ningún alto jefe militar se ha ofrecido a deducir responsabilidades y dar con el paradero del libro extraviado.

El juez, pues, ha avanzado en su trabajo indagatorio, pero la investigación ha retrocedido casi a cero. Los testigos probables resulta que no lo son. Ni los honorables comisionados para investigar se tomaron la molestia de cumplir el mandato presidencial, ni los que se supone deben cuidar de la patria saben cuidar de sus libros de control. Como se ve, son problemas y obstáculos a la investigación que no provienen de especulaciones; ni siquiera son problemas que competan en sí mismo al sistema judicial. Se circunscriben totalmente a actuaciones y omisiones de miembros de la Fuerza Armada, así como del Presidente del Ejecutivo. Y siendo que sobre estas mismas autoridades militares y civiles recae la responsabilidad de negociar la paz con el FMLN, es muy fácil deducir que así como le va al proceso judicial de los jesuitas asesinados, así le irá, y peor, al proceso de paz en el país. Porque si ése es el grado de cooperación con la justicia del que hacen gala cuando enfrentan la indignada opinión pública mundial, no se ve por dónde deban proceder con mayor responsabilidad y seriedad en el claustro de las conversaciones, a la hora de discutir con el FMLN la depuración y reestructuración de la Fuerza Armada, punto central para la democratización del país.

Que una misma voluntad política se encuentra tras el avance o retroceso en la investigación de la masacre de la UCA y buena parte de la suerte que corra el proceso de pacificación nacional es cosa claramente vista en la moción del senador Christopher Dodd, que vincula al progreso de ambos procesos la concesión de más ayuda militar al ejército salvadoreño para el próximo año fiscal. La reacción del Presidente Cristiani y su Alto Mando militar a tal moción no ha sido nada esperanzadora. Cristiani ha dicho que los fondos militares recortados por Estados Unidos se repondrían con presupuesto de programas sociales, mientras que el jefe del Estado Mayor alardea de que, con o sin la ayuda norteamericana, el ejército habrá de derrotar al comunismo. Y no es nada alentadora la reacción gubernamental por cuanto, para asegurar la ayuda norteamericana y "derrotar al comunismo", basta con ser más consecuentes y responsables con la investigación del múltiple asesinato y con el saneamiento y democratización de la Fuerza Armada.

Si en teoría ya sabíamos que no es posible la paz sin verdadera justicia, la realidad nacional se ha encargado de concretizarlo, uniendo el caso de los mártires de la UCA al logro de la paz negociada.

Sospechoso extravió de pruebas en el caso de la UCA

OCHOA: Al reafirmar su opinión de que el coronel Benavides actuó según instrucciones superiores al ordenar la masacre de los jesuitas, el presidente de CEL, coronel Sigifredo Ochoa Pérez, reiteró el 02.05 la necesidad de "castigar a los elementos de la Fuerza Armada que ponen en entredicho a la institución. Entiendo que debe haber solidaridad, pero no estar protegiendo a elementos que le hacen daño a la institución". En relación al comunicado emitido por la Fuerza Armada, en el cual los comandantes de todas las guarniciones califican sus declaraciones como "irresponsables y tendenciosas", Ochoa replicó que "como militar me debo a la Fuerza Armada, ya que acompañé a los soldados y jamás pensé en enriquecerme cuando estuve de servicio, como ha sucedido con otros militares", al tiempo que rechazó a quienes lo acusan de estar favoreciendo a la izquierda "cuando yo soy anticomunista y he peleado contra el FMLN, que es un adversario tremendo". Sobre el hecho mismo de la masacre de los jesuitas, el "héroe de Cabañas" reiteró que "yo no estoy de acuerdo con que en una guerra se cometan atropellos, una cosa es pelear limpio con el adversario, en toda guerra hay muertos...pero una cosa es matar en combate y otra es asesinar a sangre fría".

Si algunas dudas subsistían sobre el involucramiento institucional de la Fuerza Armada en la masacre de la UCA, la presentación del informe Moakley debiera haberlas disipado (**Procesos 426-427**). Este ha sido suficientemente claro al señalar que la investigación de la masacre se encuentra virtualmente estancada y que, si el proceso judicial se elevara a plenario en estos momentos, el coronel Benavides difícilmente podría ser condenado en base a las pruebas recabadas por la Comisión "Investigadora" de Hechos Delictivos.

Los sectores que se han sentido aludidos por las críticas de la comisión Moakley se han apresurado a rasgarse las vestiduras. "Denunciamos la instrumentalización que de este caso quieren hacer los políticos de izquierda, nacionales y extranjeros, con tal de desprestigiar a la Fuerza Armada", declaró el 10 de mayo el coronel Francisco Elena Fuentes, comandante de la Primera Brigada de Infantería. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Mauricio Gutiérrez Castro, calificó de "ligeras e irresponsables" las afirmaciones de que el proceso judicial contra los asesinos de los jesuitas está detenido. Asimismo, afirmó que en Estados Unidos la justicia camina sólo "un poco mejor" que en El Salvador y externó sus dudas de que "un tribunal de los Estados Unidos pueda practicar todas las pesquisas y diligencias encaminadas a esclarecer un delito" (**El Mundo**, 8 de mayo de 1990). Incluso el Presidente Cristiani ha achacado al informe Moakley el haber recogido "muchas especulaciones que a veces trata de dar como ciertas, lo cual entorpece el proceso judicial".

A despecho del escándalo manifestado por el ejército, la Corte Suprema y por Cristiani, en el curso de la primera quincena de mayo, todos los nuevos datos surgidos en relación al caso de la UCA han apuntalado las conclusiones del informe Moakley.

El dato más relevante se refiere a la desaparición del libro de control de entradas y salidas de la Escuela Militar durante la semana de la ofensiva. En respuesta a un oficio librado por el Juez Cuarto de lo penal, Dr. Ricardo Zamora, requiriendo dicho documento, la Escuela Militar

ha respondido que se "extravió". Por otra parte, la actitud asumida por los miembros de la Comisión de Honor citados a declarar en calidad de testigos, no ha sido menos sospechosa. El Dr. Antonio Augusto Gómez Zárate y el Lic. Rodolfo Parker Soto, asesores legales de la Comisión, tenían que declarar el viernes 4 de mayo. No lo hicieron sino hasta el lunes 14, luego de que el Juez Zamora les formulara una segunda citatoria. Según informes extraoficiales, ambos negaron haber interrogado a los oficiales y efectivos implicados en la masacre, al igual que lo negaron previamente el general Rafael Villamariona y el coronel Dionisio Ismael Machuca, miembros también de la Comisión de Honor.

Los cuatro cadetes que, presuntamente, prestaron guardia en la Escuela Militar la noche de la masacre, se encontraban realizando estudios en el exterior. Uno de ellos estaba en Panamá y los tres restantes en Fort Benning (Georgia, Estados Unidos) —en Fort Benning recibieron también adiestramiento militar el teniente José Ricardo Espinoza Guerra, el sargento Antonio Ramiro Avalos Vargas (alias "Satanás") y el cabo Angel Pérez Vásquez, participantes en la masacre. El teniente Espinoza Guerra la comandó. El sargento "Satanás" destruyó a balazos los cráneos de los PP. Segundo Montes, Juan Ramón Moreno y Amando López. El cabo Pérez Vásquez remató al P. Joaquín López y López—. El Presidente Cristiani giró instrucciones para que los cuatro cadetes regresaran al país a declarar. El 11 de mayo, rindieron su declaración dos de ellos, José Wilfredo Aquilar Alvarado y Erick Othmaro Granados Morán. El día 15 comparecieron los dos restantes, César Moisés Rivera Pérez y Raúl Galán Hernández. Según versiones extraoficiales, los cuatro desmintieron que estuvieran de guardia la noche de la masacre. Con todo, al menos confirmaron que en la Escuela Militar se llevan varios libros de registro, como el de llegada de visitantes, de tropas, y de entrada y salida de todo tipo de vehículos particulares o militares. El Juzgado Cuarto de lo Penal no tiene en su poder ninguno de estos libros.

Sobre el trasfondo del informe Moakley, este conjunto de irregularidades no hace sino fortalecer las sospechas sobre la voluntad institucional de la Fuerza Armada de entorpecer las investigaciones. Desaparece el libro de

ANTICOMUNISTAS: Según un cable del **Religious News Service** fechado en Washington el 09.05, en noviembre de 1987, esto es, dos años antes de la masacre de la UCA, la XVII Conferencia de Ejércitos Americanos, reunida en Argentina, elaboró un informe confidencial en el cual se calificaba al rector de la UCA, P. Ignacio Ellacuría, como un "marxista recalcitrante" que respaldaba "los objetivos de la revolución comunista". El informe, de 44 páginas, titulado "Estrategia del Movimiento Comunista Internacional (MCI) en América Latina a través de varias modalidades de acción", se refiere a la teología de la liberación como el "frente religioso" del MCI y acusa a Ellacuría y a otros teólogos de la liberación no simplemente de incurrir en errores doctrinales sino de efectuar una "manipulación consciente" del mensaje cristiano "en favor de los objetivos de la revolución comunista". Como representante del ejército salvadoreño en el comité que elaboró dicho informe participó el coronel Juan Orlando Zepeda, actual Viceministro de Defensa. De acuerdo a Americas Watch, la participación del coronel Zepeda en la elaboración del informe añade "un nuevo e importante elemento" al cúmulo de indicios que sugieren su implicación en la masacre de la UCA (**Proceso 427**).

ZEPEDA: El 07.05, el Viceministro de Defensa, coronel Juan Orlando Zepeda, rechazó "enfáticamente cualquier vinculación tanto mía como del Alto Mando" con la masacre de la UCA. Asimismo, criticó el programa "60 minutos", transmitido por la CBS el 22.04, en que se sugiere su implicación en la masacre. Opinó que dicho programa "puede tener algún propósito de reducir o condicionar la ayuda militar tan necesaria en este momento". "Cuando el periodista —indicó— afirma que el coronel Benavides se tenía que reportar a mi persona, hay una tendencia maliciosa a involucrarme en algo que no tengo responsabilidad ni moral ni formal, pues está basado en meras deducciones especulativas... No tengo nada que ver con operaciones, sólo en administración.. mis autorizaciones son para dar de baja o de alta a algún cadete, aumentos de salarios o construcciones en la Escuela Militar". Señaló que, de hecho, el superior directo de Benavides era el jefe del Estado Mayor, coronel René Emilio Ponce. Por otra parte, calificó de "absurdas", "desventuradas" y carentes de "base sólida" las declaraciones del coronel Ochoa sobre la implicación de otros jefes militares en la masacre, y aseguró que nunca tuvo animadversión contra los jesuitas. "Me he quebrado la cabeza", puntualizó, buscando determinar los motivos de la masacre.

control de entradas y salidas de la Escuela Militar. Los miembros de la Comisión de Honor, quienes en enero interrogaron al coronel Benavides y a los efectivos del batallón Atlacatl para determinar sus responsabilidades en la masacre, ahora afirman que nunca los interrogaron. Los cadetes que prestaban guardia en la Escuela Militar la noche de la masacre afirman que no prestaban guardia sino que dormían. En resumidas cuentas, nadie oyó nada, nadie vio nada, nadie sabe nada.

Todo esto ocurre inmediatamente después de que una comisión del Congreso norteamericano, tras examinar acuciosamente el curso de las investigaciones, ha externado sus sospechas de que en la masacre están involucrados otros militares de alto rango, además de Benavides. Con sobrada razón, tanto el Congreso como la misma Administración Bush, han mostrado su desaliento por el curso del caso. "Estamos frustrados" exclamó, a comienzos de mayo, el secretario de Estado adjunto para asuntos interamericanos, Bernard Aronson. En diez años —añadió— se ha cometido "demasiado crimen de este tipo en El Salvador" y "parece que nadie ha sido castigado por ellos". El propio Secretario de Estado, James Baker, al dirigirse al Senado el 1 de mayo, manifestó que "este caso se ha convertido en un punto decisivo en la historia de El Salvador", y advirtió taxativamente que la ayuda norteamericana al país se vería afectada por la forma como el gobierno salvadoreño manejara el caso. El 7 de mayo, en San José de Costa Rica, el jefe del personal de la Casa Blanca, John Sununu, advirtió a Cristiani que el caso de la UCA es "un asunto serio" que tendrá "un impacto significativo" en la ayuda norteamericana a El Salvador.

A pesar de ello, el caso no prospera. El propio Cristiani, en San José, evadió pronunciarse sobre el libro de control de entradas y salidas de la Escuela Militar. Hubiera sido muy bochornoso admitir su desaparición ante la prensa internacional reunida en San José para la investidura presidencial de Calderón Fournier. Al regresar a San Salvador, en un clima de mayor confianza, prometió que giraría instrucciones para investigar su paradero. Así es como funcionan las instituciones "democráticas" salvadoreñas en el caso en el que, presuntamente, más empeño han puesto en impartir "justicia" en todo lo que va de la guerra.

El empantanamiento de la guerra

A lo largo de los diez años que lleva el conflicto en El Salvador, el Alto Mando castrense ha venido insistiendo en la inminente derrota del FMLN, producto de su creciente debilidad militar. Esta hipótesis ha sido invariablemente invalidada por el accionar del FMLN. Al cabo de diez años de guerra, el resultado de ello es un conflicto empantanado, cuyas perspectivas de definición siguen siendo imprevisibles.

La Indefinición militar

Entre otras causas, ese **impasse** militar es producto de las ventajas operacionales que cada uno de los bandos posee y que compensan las desventajas que pueda tener en otro aspecto. La Fuerza Armada posee las ventajas de su superioridad numérica (de 10 a 1, según el Departamento de Estado norteamericano), infraestructura logística más eficaz y mayores recursos, y, específicamente, el factor determinante del considerable apoyo aéreo de que dispone (según información reciente de la agencia EFE, la Fuerza Aérea salvadoreña (FAS) cuenta con 63 aviones de combate y 72 helicópteros).

El FMLN, por su parte, posee, cuando menos, tres ventajas: una indescifrable modalidad logística, el factor sorpresa para realizar sus acciones y la ventaja que le significa impulsar acciones propias de una guerra irregular y de guerrillas. Llama poderosamente la atención el hecho de que, a pesar de todos sus recursos, la Fuerza Armada, a la vuelta de diez años, no haya podido erradicar a un grupo de "delincuentes terroristas", cuya base social de apoyo, adicionalmente, sería mínima.

La indescifrabilidad de los canales logísticos del FMLN juega un papel clave en la indefinición del conflicto. La capacidad de movilizar a sus combatientes a través de

cercos militares y aprovisionarlos de vituallas sugiere que el FMLN goza todavía de un apoyo importante de la población civil. Adicionalmente, al impulsar operaciones propias de una guerra de guerrillas —como el sabotaje a la infraestructura eléctrica, por ejemplo— el FMLN está en ventaja en la medida que, por numeroso que sea el ejército gubernamental, nunca podrá vigilar todos los postes y torres del tendido eléctrico nacional. En general, la Fuerza Armada no está en capacidad de prestar seguridad a todos los objetivos probables del sabotaje guerrillero; en esa medida, mientras el FMLN no sea desarticulado del todo, aún cuando fuese diezmado sustancialmente, la guerra de guerrillas se mantendrá.

Finalmente, la modalidad de guerra irregular permite al FMLN "desvanecerse" cuando la evaluación de la situación así se lo aconseja. Puede esconder las armas en depósitos subterráneos o, en el peor de los casos, simplemente abandonarlas, y sus combatientes confundirse entre la población civil.

Una vez más, se impone la realidad de que, debido a las características particulares del conflicto salvadoreño, su definición militar no es previsible en el corto o mediano plazos. El examen de la dinámica militar reciente confirma esta apreciación.

Optimismo castrense

Recientemente, varios comandantes de guarniciones militares del interior del país han expresado sus evaluaciones sobre el desenvolvimiento de la guerra en sus respectivas zonas militares. Según versiones de prensa publicadas el 25 de abril, el coronel Julio César Grijalva, comandante del Destacamento Militar Número 3, con sede en el puerto de La Unión, expresó que un grupo de

unidades bajo su mando se encontraba rastreando una columna de unos 250 guerrilleros asentada en varias zonas del municipio de Jocoro (Morazán), lo cual la estaba obligando a replegarse hacia varias zonas del departamento de La Unión.

El desarrollo de sendos combates en Yucuaquín (La Unión) durante las últimas dos semanas, en los cuales, según el COPREFA, habrían muerto 24 guerrilleros, daría pábulo a la percepción del coronel Grijalva, de no ser por las declaraciones de vecinos de Jocoro dadas a conocer por la prensa nacional en la presente semana. De acuerdo a campesinos residentes en varias zonas de dicho municipio, la fuerte presencia guerrillera en el área, que ellos consideran como zona bajo control guerrillero, no les permite efectuar con normalidad sus tareas agrícolas. Los campesinos se quejan de la imposibilidad de cultivar la tierra, y de la actitud de la guerrilla de exigirles alimentos, dinero y su incorporación a las filas rebeldes. Ante esta situación, solicitan a la Fuerza Armada que erradique a los grupos "subversivos", al tiempo que piden a la comandancia del FMLN que les permita trabajar las tierras.

Aparte de evidenciar que la guerra sigue afectando principalmente a las clases más desposeídas, las declaraciones de los vecinos de Jocoro cuestionan las valoraciones de la dinámica militar vertidas por el coronel Grijalva, o al menos apuntan a la ineffectividad de los operativos de rastreo que las unidades bajo su mando estarían realizando en ese municipio.

Otras señales de la ineffectividad de los operativos contrainsurgentes se derivan de las declaraciones del coronel René A. Majano, comandante del Destacamento Militar Número 2, con sede en Sensuntepeque (Cabañas). El 30 de abril, la prensa nacional reprodujo declaraciones suyas sobre la operatividad castrense en su zona militar. Según el coronel Majano, todo el depar-

tamento de Cabañas ha sido objeto recientemente de fuertes operativos contrainsurgentes y de vigilancia. Con todo, el 1 de mayo, el FMLN atacó posiciones militares en la ciudad de Ilobasco, entablando un combate que se prolongó por más de 6 horas.

Por su parte, el coronel Heriberto Hernández, comandante de la Sexta Brigada de Infantería, con sede en la ciudad de Usulután, ha asegurado recientemente que los operativos contrainsurgentes en dicho departamento han conducido al ejército a la recuperación de varias zonas de persistencia guerrillera. La dinámica militar de las últimas dos semanas en esa zona (un hostigamiento guerrillero y un regular decomiso de armas por parte del ejército) sugieren, con todo, que el FMLN no está tan desarticulado como podría inferirse de las declaraciones del coronel Hernández.

Acciones bélicas recientes

Durante la última semana, de acuerdo al COPREFA, la dinámica militar ha favorecido claramente al ejército, el cual habría logrado asestar fuertes golpes de mano a las fuerzas guerrilleras. Estos habrían tenido lugar en los municipios de Jocoro (Morazán), donde tropas combinadas habrían causado un total de 18 muertos al FMLN, incluido un comandante; y de Yucuaquín (La Unión), donde el FMLN habría sufrido 16 bajas mortales. Según los reportes castrenses, el ejército no habría sufrido baja alguna.

Las acciones ocurridas en Jocoro, y los antecedentes de la operatividad guerrillera en este municipio, sugieren que ésta es, de momento, la zona con mayor presencia guerrillera. Además, el hecho de que en los combates participaran tropas de la Tercera Brigada de Infantería, con sede en San Miguel, y de los Destacamentos Militares 3 y 4, apoyadas por unidades mecanizadas y aéreas, dan pie a pensar en un cambio en la

situación militar. Esta zona ha pasado de ser una bajo control del FMLN —los mismos vecinos la consideraban como tal— a una que podría considerarse como zona de disputa, al igual que la zona comprendida en el municipio de Yucuaquín, donde se han registrado intensas acciones armadas.

Además de los combates de Jocoro, en Morazán se registró otro combate en el municipio de Joateca, donde murieron 3 insurgentes.

Otras acciones de guerra ocurrieron en el departamento de Cuscatlán, donde se registraron dos ataques del FMLN, uno de ellos contra una posición del ejército, y el otro contra dos helicópteros que resultaron con daños menores. En esta última acción resultaron con heridas dos subtenientes (el piloto y copiloto de una de las aeronaves).

Un combate ocurrió en cada uno de los departamentos de San Vicente y Chalatenango, donde además se registró un ataque. Sendos ataques se escenificaron en los departamentos de San Salvador, Santa Ana y Sonsonate. En San Vicente, el FMLN realizó dos ataques contra posiciones militares.

A nivel consolidado, estas acciones habrían arrojado un saldo de 39 muertos en las filas del FMLN y 2 muertos y 6 heridos en las del ejército. El saldo del sabotaje habría consistido en la destrucción de 6 postes y 3 torres del tendido eléctrico.

Pronósticos

El balance castrense de la marcha más reciente de la guerra movería a pensar que la iniciativa militar está siendo asumida más por las fuerzas gubernamentales que por el FMLN. Adicionalmente, según informaciones difundidas por la Fuerza Armada, el FMLN estaría enfrentando una "situación de divisionismo" en sus filas. De acuerdo a tales fuentes, entre diciembre de 1989 y abril de 1990, habrían desertado 106 guerrilleros, quienes se habrían presentado a diferentes

guarniciones militares del país.

Los reportes castrenses van aún más lejos. Según informes proporcionados por un presunto desertor, las discrepancias existentes al interior del FMLN son tan graves que inclusive produjeron un enfrentamiento armado entre fuerzas de las FAL y de las FARN. El hecho de guerra habría ocurrido en el cerro San Pedro (San Vicente), con saldo de 40 insurgentes muertos. Tomando en cuenta la estrategia propagandística de la Fuerza Armada, tal información resulta muy poco confiable, pero no puede descartarse apriorísticamente como del todo inverosímil.

Al tiempo que la propaganda castrense ha dado a conocer esas presuntas fricciones en el FMLN, la Fuerza Armada continúa incorporando nuevos efectivos a sus filas. Recientemente fueron incorporados 97 nuevos reclutas al Destacamento Militar Número 6 (Sonsonate); 196 al Destacamento Militar de Ingenieros (Zacatecoluca, La Paz); 219 al batallón Atonal; 100 a la Tercera Brigada de Infantería (San Miguel), y un número no precisado a la Quinta Brigada de Infantería (San Vicente). Además, habrían recibido su sable, que los acredita como subtenientes, 75 cadetes y 50 sargentos.

Sin embargo, pese a este reclutamiento de nuevos efectivos, y aun suponiendo que los partes de guerra y las versiones de supuestos desertores recabadas por la inteligencia militar son ciertos, ello no constituye condición suficiente para definir la situación militar a favor de la Fuerza Armada. De hecho, el FMLN ha mantenido ininterrumpido su accionar.

La guerra, pues, sigue presente en el horizonte del país. El ejército ha mantenido sus operativos contrainsurgentes, mientras continúa incorporando efectivos a sus filas; el FMLN, por su parte, ha anunciado más acciones de guerra mientras el ejército mantenga los operativos mencionados. En este marco habrá de desarrollarse la nueva ronda de diálogo entre el gobierno y el FMLN.

Vicisitudes de la reforma agraria

Frente a los temores expresos de numerosas organizaciones populares de que el proceso de Reforma Agraria se eche para atrás, la gestión de ARENA ha mantenido desde julio de 1989, a través de la Financiera Nacional de Tierras Agrícolas (FINATA), una política de entrega de escrituras de tierras a campesinos favorecidos por el decreto 207, especialmente en la región occidental del país. Tal política estaría encaminada a la meta trazada por los discursos eleccionarios del propio Cristiani, en los cuales afirmaba la pretensión de volver propietarios a todos los salvadoreños.

De hecho, el 21 de junio pasado, antes de que concluyera el primer mes de la nueva gestión, el presidente de FINATA, Raúl García Prieto, declaró a la prensa que "la nueva administración de FINATA dará prioridad a la adjudicación de tierras agrícolas en forma individual por considerar que ese esquema está más identificado con el sistema de libre empresa y la política de liberación nacional del Presidente Cristiani; ello no quiere decir que será descuidado el sistema cooperativo". Meses después, el 26 de enero del presente año, García Prieto informó que FINATA habría entregado 22 mil títulos de propiedad a igual número de campesinos, lo cual "demuestra que FINATA, lejos de retroceder en el proceso de reforma agraria, avanza". El 8 del mismo mes, el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA) anunció reformas legales a la reforma agraria "para hacerla democratizarse y dar (a los beneficiarios) apoyo a la comercialización de sus productos".

El apoyo declarado por la actual gestión gubernamental para la continuación de la reforma agraria parece limitarse a la entrega de títulos de propiedad a los campesinos beneficiarios del decreto 207. El 26 de enero, la prensa informó que FINATA entregaría

más de 3 mil títulos de propiedad en el departamento de Ahuachapán. En la segunda semana de febrero, dicha entidad entregó 738 títulos en Guaymango; el 4 de marzo, en Jujutla, entregó otros 308 títulos, al tiempo que informó que aún había 2 mil personas más beneficiadas. El 10 de marzo, la Financiera entregó 300 escrituras más en San Francisco Menéndez, también en Ahuachapán. En dicha ocasión, García Prieto señaló que la labor de FINATA es parte de "la lucha del campesinado salvadoreño en contra del hambre, incorporándose, por medio de la tenencia individual de tierra, a la producción masiva de alimentos". El 17 de marzo, tal labor continuó con la entrega de otros 439 títulos de propiedad en Acajutla (Sonsonate) y en San Juan Opico (La Libertad). García Prieto aprovechó la ocasión para explicar que el criterio para escoger a los beneficiarios era la puntualidad en los pagos de los créditos concedidos y la dedicación al trabajo agrícola. El 22 de abril, fueron entregados otros 320 títulos en Textistepeque (Santa Ana), donde el vicepresidente de FINATA, Arq. Roberto Molina, informó que "este año las cooperativas darán tierras en alquiler a campesinos que puedan participar en el programa de rescate de la producción de granos básicos". Tal anuncio constituye otro paso en la reconfiguración del modelo cooperativo típico que la reforma agraria había seguido hasta ese momento, y en su reorientación en favor de un proceso de parcelización de las tierras del sector reformado. Respecto de tales medidas, ACOPAI señaló, el 20 de febrero pasado, que es lamentable que se esté pensando en adjudicar parcelas individuales, "porque eso desestabilizará y frustrará el trabajo desarrollado por las cooperativas". Con todo, el 6 de mayo último, FINATA continuó las entregas con 266 escrituras más en Chalchuapa (Santa Ana).

Protestas ante la marcha del proceso

Como parte de la "reorientación" de la reforma agraria, aspectos definitivos para la marcha del proceso han sido abandonados, manejados politizadamente y/o mal manejados.

El 19 de enero pasado, la UNOC denunció que el ISTA pretende imponer a los trabajadores del sector reformado "un modelo de consolidación de la reforma agraria basado en la parcelación de tierras en manos de los cooperativistas, aniquilando con ello las organizaciones campesinas".

Por otra parte, el manejo partidista de las medidas e instancias diseñadas para "impulsar" el proceso, ha transparecido claramente en la creación, el pasado 13 de febrero, del Consejo Consultivo Campesino, el cual ha sustituido al Consejo de Organizaciones Campesinas (COC), que el gobierno anterior creó para dirigir las decisiones de compra y entrega de tierras a los campesinos. Según denuncias de las organizaciones que integraban el COC, en el CCC la presencia campesina ha pasado a ser un mero órgano de consulta, y no una instancia de decisión. El 14 de febrero pasado, la UNOC y la UNTS denunciaron que el nombramiento de los miembros del CCC ha estado manipulado por FINATA. Producto de tal manipulación sería la publicación de comunicados de agradecimiento y apoyo al Presidente Cristiani y a la Asamblea Legislativa, como el de las cooperativas de la zona oriental, difundido el 19 de enero, y el del 27 de febrero, firmado por el mismo CCC, en que se felicita a Cristiani "por una exitosa gestión en búsqueda de ayuda" para El Salvador durante su viaje a Taiwán, que "realizó a nuestro nombre y beneficio"; así como el de ANAS, difundido el 7 de marzo, en apoyo al programa agrario del gobierno y, en general, a todos

los programas de desarrollo económico y social de ARENA.

El 5 de febrero, la UNOC protestó contra tal situación, e impugnó la pretensión de FINATA de asumir la dirección del Banco de Tierras. Según la UNOC, éste debiera ser dirigido por las propias organizaciones campesinas. El 22 de febrero, el Viceministro de Agricultura replicó que el CCC trabaja para ampliar el acceso al Banco de Tierras, e informó que éste disponía de recursos financieros para reactivar la reforma agraria.

En el marco de las protestas campesinas contra la política económica implementada por ARENA en materia agraria, una de las principales instancias contestatarias ha sido la Asociación Democrática Campesina (ADC), integrada en septiembre de 1989. En aquel momento, el objetivo principal de la ADC fue defender los logros de la reforma agraria frente a los fallos de la Corte Suprema de Justicia, los cuales mandaban a 30 cooperativas devolver sus tierras a los antiguos propietarios. Pero, en general, la ADC fue integrada "para la defensa de la reforma agraria, la democracia y la justicia social". El 28 de febrero pasado, la Asociación exigió la implementación de la fase II de la reforma agraria y que las propiedades de más de 100 hectáreas sean afectadas por tal proceso. Respecto a los nuevos fondos provenientes de Taiwán, la ADC afirmó la necesidad de establecer mecanismos de concertación que determinaran su adjudicación más eficaz, y rechazó nuevamente la manipulación del sector agropecuario a través de organizaciones como el CCC.

Para la celebración del décimo aniversario del inicio de la reforma agraria, el 6 marzo, la ADC realizó un foro por la defensa y profundización del proceso agrario, evento en el cual participaron delegados de 20 organizaciones (Proceso 420). Los asisten-

tes demandaron la condonación de la deuda agraria, la cual alcanza ya los 300 millones de dólares, y la supresión de las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia que afectan la reforma agraria. En la misma ocasión, el dirigente de la UNOC, Amanda Claribel Villatoro, afirmó que los diez años del proceso "están en peligro con las últimas medidas tomadas contra el sector por parte del gobierno... siendo la reforma agraria uno de los bastiones más importantes para la democracia en el país". Asimismo, señaló que la política agraria de ARENA "tiene el objetivo de dividir económica y organizativamente al campesino... La privatización de la banca junto a aquella medida permitirá el regreso de tierras a sus dueños". Por otra parte, denunció que el ISTA está obligando a las cooperativas del sector reformado a aceptar un co-administrador como requisito indispensable para conceder los créditos para la cosecha 1990-1991.

La propaganda del gobierno, que en el último mes y medio ha achacado con mayor insistencia la crisis actual de la economía a la corrupción e ineficiencia del gobierno anterior, así como a las acciones de guerra y al sabotaje del FMLN, se ha referido a la reforma agraria como la "gran carga negativa" que el Presidente Cristiani "debe llevar sobre sus espaldas", según lo formuló el presidente de FINATA el pasado 9 de marzo. Tres días antes, el presidente del ISTA había afirmado que "el proceso de reforma agraria ha sido un fracaso, y muy negativo para los campesinos... eso se debe a que cuando el proceso se inició el campesino no estaba preparado

para esto".

En este marco, las federaciones cooperativas han manifestado que uno de los mayores obstáculos que enfrentan ha sido la política crediticia ineficiente. Al respecto, el gobierno ha anunciado que la banca nacional abrirá un programa de refinanciamiento para las 389 cooperativas del sector reformado, que adeudan 600 millones de colones (sólo han pagado 20 millones), lo cual se traduce en que el 35 por ciento de las tierras reformadas sean tierras ociosas. De acuerdo al anuncio gubernamental, la banca compraría la cartera en mora de las cooperativas con créditos vigentes sin capacidad de pago, y autorizaría nuevas líneas de créditos.

Sin embargo, mientras el gobierno no haga efectivas tales promesas, el movimiento cooperativo sigue planteando como su reivindicación prioritaria el acceso oportuno a los créditos. El 9 de mayo, la ADC manifestó que "Cristiani no tiene una política definitiva en cuanto al refinanciamiento de las cooperativas en mora", y denunció que hay casos en los que las cooperativas no reciben las solicitudes o en que se les exige el pago de la mora para otorgarles nuevos financiamientos. El dirigente cooperativista, José Orlando Arévalo, destacó que el problema radicaba en que "se ahogan las cooperativas al obstaculizarles el crédito y éstas no funcionan", con lo cual el gobierno tiene un pretexto para vender "la idea de querer parcelar las tierras" y revertir el carácter fundamentalmente cooperativo que inspiró en un principio al proceso de reforma agraria.

La primera crisis administrativa de Violeta de Chamorro

Violeta de Chamorro no ha tenido una "luna de miel" en el inicio de su gestión presidencial. Desde el primer día de su mandato, ha debido adoptar decisiones difíciles y controversiales, que han puesto a prueba la consistencia de la frágil coalición política que la llevó hasta la silla presidencial. Al haber logrado, sin embargo, concertar una transmisión pacífica del poder, la gobernante y sus más cercanos asesores dieron muestras de una insospechada capacidad negociadora frente a una oposición sólida y ante el desafío de desarmar en el plazo inmediato a una fuerza armada irregular en descomposición.

En dos semanas de gestión administrativa, el nuevo gobierno también ha consolidado las posibilidades de alcanzar una paz estable en Nicaragua. Con todo, hay dos cuestiones fundamentales de cuya solución dependerá la viabilidad del gobierno de Violeta de Chamorro. Una, absolutamente perentoria, es la desmovilización de los contras. La otra, la reversión de la crisis económica, constituye un reto de más largo plazo, pero exige también medidas drásticas de corto plazo.

Desmovilización de los contras en marcha

La esperada desmovilización de las fuerzas antisandinistas se ha iniciado por fin. Los líderes antisandinistas llegaron a la inevitable conclusión de que su organización carecía de todo futuro como fuerza militar y admitieron la improcedencia de sus pretensiones de exigir cuotas de poder dentro del nuevo gobierno. De esta suerte, como producto de un largo proceso negociador —entropicado en su transcurso por las tácticas dilatorias de los propios antisandinistas— la Sra. de Chamorro acordó con los comandantes de la contra los términos para poner en marcha el proceso de desarme e incorporación de los antisandinistas a la vida civil. Los términos medulares del acuerdo estipulan que, a cambio de la entrega de las armas, los contras recibirán de parte del gobierno ayuda económica y garantías de seguridad de su integridad física, incluyendo dentro de las mismas el desarme de civiles pro sandinistas y la reducción de las fuerzas

POLICIA: El 05.05 se dio a conocer que la Corte Suprema de Justicia crearía una policía judicial "totalmente independiente de los cuerpos de seguridad y militares, y que se encargará exclusivamente de la investigación de los delitos". El presidente de la Corte, Dr. Mauricio Gutiérrez Castro, justificó la creación de dicha entidad aduciendo que la falta de un organismo especial de investigación del delito constituye "uno de los principales escollos para la impartición de justicia" ya que "muchas veces los procesos judiciales adolecen de fallas porque hay deficiencias en la recopilación de pruebas y testimonios a cargo de los organismos auxiliares". El Dr. Gutiérrez Castro indicó que "a medida que la nueva policía judicial crezca y se dote de los equipos y laboratorios necesarios, los cuerpos de seguridad podrán dedicarse más a su misión de garantizar el orden y hacer cumplir las resoluciones de las autoridades". Asimismo, informó que los preparativos de la nueva policía judicial se iniciarán en junio próximo, junto con la creación de una escuela de capacitación judicial. La policía judicial funcionaría bajo la dirección de la Corte Suprema de Justicia, de la Fiscalía General de la República y de la Procuraduría General.

ENTREVISTA: En su edición del 09.05, el **Washington Post** publica el resumen de una entrevista de dos horas y media concedida por el coronel Benavides a los reporteros Rowland Evans y Robert Novak. De acuerdo a la entrevista, Benavides habría sido el primer sorprendido al enterarse de la masacre de los jesuitas, "porque yo había oído que el P. Ellacuría había estado diciendo cosas favorables sobre el Presidente Cristiani". Benavides aseguró a los reporteros que él pensó en aquel momento que el responsable de la masacre había sido el FMLN. Su sorpresa creció cuando, el 6 de enero, fue llamado al Estado Mayor, donde se le presentó una carta en que un mayor de apellido Buckland, del grupo de asesores norteamericanos asignados a El Salvador, afirmaba haber tenido noticias, a través del coronel Carlos Armando Avilés, de que él estaba involucrado en la masacre. Según Benavides, el propio Avilés le habría asegurado que nunca comentó tal cosa al mayor Buckland. "Soy cristiano —añadió— y por eso tengo fe en que se va a llegar al fondo de esta situación". Al preguntársele si consideraba que los tenientes que comandaron la masacre actuaron por cuenta propia, respondió: "No lo creo posible", aunque también descartó que hubiese algún complot en su contra por parte de otros altos militares.

armadas. El programa de reducción del ejército nicaragüense se daría a conocer el 10 de junio, día para el cual estará, presuntamente, concluida la desmovilización de los antisandinistas.

De ser escrupulosamente cumplido, el acuerdo marcaría un momento trascendental en la historia de Nicaragua. Con él se cerraría la aventura militar emprendida por la Administración Reagan. Para Violeta de Chamorro, el acuerdo suscrito "significa el adiós a las armas, el triunfo de la paz sobre la violencia, significa que los nicaragüenses todos podremos abrazarnos y caminar unidos hacia la verdadera democracia que todos hemos anhelado". Desde el 8 de mayo hasta la fecha, el proceso de desmovilización de los contras se ha realizado de manera lenta pero sostenida. Los observadores militares de ONUCA opinan que, de existir una verdadera disposición para deponer las armas por parte de los contras, el proceso de desarme estará concluido en la fecha prevista. Por su parte, el ejército nicaragüense ha iniciado la recolección y destrucción de las armas en poder de los campesinos que habitan en los alrededores de los enclaves antisandinistas.

Medidas económicas antipopulares

El reto económico es aún mayor. Si bien es cierto que dos semanas son, en absoluto, insuficientes para corregir los profundos desajustes de la economía, el electorado nicaragüense no olvidará fácilmente las promesas de la campaña electoral. Empero, las primeras medidas económicas implementadas por el nuevo gobierno no parecen responder a esas expectativas. Su carácter impopular ha saltado ya a la vista. Las poderosas organizaciones sindicales afines al Frente Sandinista las han rechazado, inaugurando la primera crisis de gobierno para la viuda de Chamorro.

Durante sus primeras dos semanas de gestión administrativa, el director del Banco Central de Nicaragua y principal asesor económico de Violeta de Chamorro, Francisco Mayorga, ha decretado sucesivamente cuatro ajustes al tipo de cambio del córdoba con relación al dólar. Paralelamente, el 9 de mayo, Violeta de Chamorro anunció personalmente la eliminación del subsidio al transporte y alzas en las tarifas de energía, agua y teléfono. Según la Presidenta, las medidas son absolutamente necesarias e

impostergables y estarían destinadas a promover la reactivación de la economía y a controlar la galopante inflación. "Heredamos un país virtualmente saqueado y completamente en bancarota y es nuestra responsabilidad llevarlo adelante", dijo la viuda de Chamorro al justificar la implementación de las medidas. Por su lado, Francisco Mayorga reconoció que el efecto de la devaluación del córdoba ha sido "severo y drástico y ha causado dolor en todos los sectores". Para Mayorga, "los gobernantes anteriores no cumplieron con su deber para dejar ese trago amargo al nuevo gobierno". Adicionalmente, el nuevo gobierno intenta restringir el gasto estatal a costa de reducir el empleo de millares de funcionarios menores del aparato burocrático. Para allanar el camino a la implementación de esta medida, el 10 de mayo Violeta de Chamorro abolió la ley de servicio civil que el anterior gobierno decretó en las postrimerías de su gestión con la explícita finalidad de evitar los despidos masivos.

Las protestas populares a tales medidas no se han hecho esperar. La amenaza de los despidos masivos ha colmado la resistencia de los sectores populares frente a la reestructuración estatal. Si bien la reacción de los trabajadores ha sido organizada y la violencia que la ha acompañado ha tenido hasta ahora bajo perfil, la huelga indefinida decretada por los trabajadores agrupados en la Unión de Empleados Estatales (UNE) ha paralizado completamente al país desde el mismo día de la abolición de la ley del servicio civil. A las demandas de aumentos salariales de hasta un 200 por ciento y por el restablecimiento de la ley abolida, el Ministerio de Trabajo ha respondido con el ofrecimiento de un aumento salarial de sólo el 60 por ciento. Ante el fracaso de las conversaciones con los líderes sindicales, el gobierno ha amenazado con el despido de los huelguistas y el recurso a la fuerza policial para el desalojo de los centros de trabajo tomados.

Violeta de Chamorro se encuentra en una difícil encrucijada.

Su proyecto económico no es viable sin una generosa inyección financiera de Washington, pero el Congreso ha hecho oídos sordos durante dos meses a sus súplicas y al propio pedido de la Casa Blanca para conceder a Nicaragua 300 millones de dólares. Sin elevar el nivel de vida de las empobrecidas mayorías populares en un plazo razonable, la gestión de Violeta de Chamorro va encaminada hacia un estrepitoso fracaso.

ADVERTENCIAS: El 01.05, el Secretario de Estado, James Baker, aseguró que enviaría una copia del informe Moakley al Presidente Cristiani "y le pediré que responda a él". Asimismo, reiteró que la masacre de la UCA "desde luego fue abominable, y si es evidente que a las víctimas no puede devolverse la vida, este caso se ha convertido en un punto decisivo en la historia de El Salvador". El 08.05, el vocero del Departamento de Estado, Richard Boucher, declaró que se había pedido a la embajada en San Salvador que investigara el paradero del libro de control de entradas y salidas de la Escuela Militar durante la noche de la masacre.

RECORTE: Al comentar la posibilidad de un recorte de la ayuda militar norteamericana, el jefe del Estado Mayor, coronel René Emilio Ponce, declaró el 07.05 que "¡con la ayuda militar de Estados Unidos o sin ella derrotaremos al comunismo!... el comunismo no triunfará en El Salvador y si bien (la lucha) pudiera tornarse un tanto difícil, no será imposible derrotarlos, por cuanto el pueblo salvadoreño los rechaza". Por su parte, el mismo día, el coronel Juan Orlando Zepeda, manifestó que "la ayuda es necesaria pero si se nos recorta o se nos suspende, de alguna manera tenemos que defendernos".

Biblioteca Florentino Idoate



166852

PRESENTACION

El boletín "Proceso" sintetiza y selecciona los principales hechos que semanalmente se producen en El Salvador y los que en el extranjero resultan más significativos para nuestra realidad, a fin de describir las coyunturas del país y apuntar posibles direcciones para su interpretación.

Sus fuentes son los periódicos nacionales, diversas publicaciones nacionales y extranjeras, así como emisiones radiales salvadoreñas e internacionales.

Es una publicación del Centro Universitario de Documentación e Información de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas".

SUSCRIPCION ANUAL

El Salvador	
personal	¢50.00
correo	¢60.00
Centroamérica y Panamá	\$25.00
Norte y Sur América	\$35.00
Europa	\$40.00
Otras regiones	\$45.00

Los suscriptores de El Salvador pueden suscribirse en la Oficina de Distribución de la UCA o por correo. Los cheques deben emitirse a nombre de la Universidad Centroamericana y dirigirse a Centro de Distribución UCA. Apdo. Postal (01) 575, San Salvador, El Salvador, C.A. Teléfono: 240744 y 240011 Ext. 181 y 191.